



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expte. N°: 31205/2012

Autos: “ALDANA JULIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”

Sentencia Interlocutoria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a sentencia, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la resolución de fecha 10 de febrero de 2022 mediante la cual se aprueba la liquidación practicada por la actora, por la suma retroactiva total de \$ 529.199,72 en concepto de capital e intereses y la sentencia interlocutoria simple dictada el 26 de agosto de 2022 que manda llevar adelante la ejecución, hasta hacer íntegro el pago de capital, intereses y costas, regulando honorarios por el valor de 6.38 UMA (\$57.446,80) más el I.V.A. en caso de corresponder.

La demandada critica la liquidación aprobada, la devolución de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias, la imposición de costas a su cargo y los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora por considerarlos elevados.

Por su parte el Dr. Percovich apela el monto de sus emolumentos por considerar que se encuentran por debajo del mínimo legal; sostiene que no se respetan los artículos 20, 21, 22 y 41 de la ley de aranceles. Sostiene que se omite la actualización de la base regulatoria a la fecha de la resolución, violentándose así el art. 22 al utilizar nominalmente un valor de varios años de antigüedad (\$ 529.199,72 al 30-Sep-2019), acompaña nuevos cálculos actualizando la liquidación oportunamente aprobada, por un total de \$ 1.129.463,52. Manifiesta que al aplicar sobre ese monto la escala del art. 21 y la reducción del art. 41 para la etapa de ejecución, arriba a un mínimo de honorarios de 13,03 UMA y al haberse desempeñado como apoderado sin patrocinio -por aplicación del art. 20- corresponde elevarlos en un 40%, motivo por el cual estima el mínimo legal es de 18,24 UMA, solicitando se eleven sus honorarios -al menos- a ese mínimo.

Respecto a los agravios vertidos por la demandada contra la resolución de fecha 10 de febrero de 2022, sobre la liquidación aprobada, la generalidad con que se intenta objetarla no resulta idónea a los fines pretendidos, pues no constituye en modo alguno, una impugnación en los términos del art. 504 del C.P.C.C.N., no habiendo demostrado la existencia de error en los números o aplicación del derecho.

Se ha dicho que “aprobada la liquidación en cuanto ha lugar por derecho”, la misma no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación (conf. C.N. Civ. Sala B, in re Consorcio de Propietarios Cangallo 2285 c/Wedovot, Enrique y otros, del 23-11-95; C.N. Fed. Civ. Y Com. Sala I, causa 1362, del 28-9-90; C. Nac.Cont. Adm. Fed. Sala I, C. 24.397/93 “Olmi Goñi, Carlos s/in. Ejec. De sent. del 21-8-96, etc).

Cabe agregar respecto a los supuestos errores materiales invocados por la ejecutada, ésta omite practicar las cuentas que a su juicio son las correctas. La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error. Habiéndose omitido tal recaudo se rechaza el agravio.

En cuanto a lo manifestado sobre los intereses calculados hasta la fecha de efectivo pago, se desestima la queja por no guardar relación con lo decidido en la resolución que apela.

En referencia a la retención del impuesto a las ganancias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en casos de aristas similares, ver “García Blanco Esteban c/ ANSES s/ reajustes varios” CSS 23339/2009/CS1 sentencia del 6 de mayo de 2021; “García Marta Susana c/ ANSES s/ Reajustes Varios”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, “García María Isabel c/ ANSES s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 26 de marzo de 2019, “Garay Corina Elena c/ANSeS S/Reajustes Varios” Sentencia del 7 de diciembre de 2021, CSS 60858/2009/CA1-CS1, entre otros. En atención a ello, cuestiones de economía y celeridad procesal obligan a remitirse a dichos fundamentos, confirmándose lo dispuesto en la instancia de grado. Por ello, se desestima el memorial de la demandada y se confirma la resolución del 10 de febrero de 2022.

Sobre la Sentencia Interlocutoria Simple del 26/8/22, no corresponde hacer lugar al agravio de la accionada dirigido contra la imposición de costas a su cargo, de conformidad al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo” Rueda Orlanda c/ ANSeS s/ ejecución previsional”, sentencia del 15 de abril de 2004, ratificado en autos “Becerra Isolina C/ANSeS s/Ejecución Previsional “. B. 668 XXXVII, sentencia del 15/06/04 y “Patiño Raúl Osvaldo” sentencia del 27/05/09.

En cuanto a la queja relacionada con la adición del 40 % que pretende el Dr. Percovich por haber actuado en el carácter de apoderado sin patrocinio, o con el suyo propio, el art. 20 de la ley de aranceles debe interpretarse en conjunción con el art.14 el que expresamente dispone “En caso de que en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una misma parte se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno. Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, los





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

honorarios se regularán considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado.”.

Es decir, en la actuación conjunta al aplicarse la ley de aranceles, el juez debe establecer los honorarios en forma global, como si hubiese intervenido un solo profesional o procurador, y distribuir los estipendios en relación a las tareas practicadas por cada uno (En este sentido ver Guillermo M. Pesaresi, “Guía Práctica Profesional: Honorarios” 3ra Edición 2021, Editorial Estudio, pág.105).

Ahora bien, en el presente caso, los emolumentos del Dr. Percovich se fijaron dentro de los parámetros de la escala prevista en el art. 21 y no obra constancia alguna que haga inferir que el magistrado de grado los redujo por haber actuado solo en el carácter de apoderado; al contrario, se le ha reconocido la asignación total (100 %) en mérito a la labor desarrollada en su doble calidad de letrado sin patrocinio -de otro profesional- o con el suyo propio en atención al doble carácter invocado.

En consecuencia, se desestima el planteo en tanto no se acredita ante esta Alzada que la retribución fijada se haya apartado de las previsiones contenidas en la ley 27.423.

Por otra parte, en cuanto a la crítica del Dr. Percovich sobre la base utilizada para cuantificar sus emolumentos (entiende deben calcularse en la suma actualizada de \$ 1.129.463,52, con fundamento en el art. 22 de la ley arancelaria), cabe señalar que la magistrada de grado los ha fijado teniendo presente el monto de la liquidación aprobada -en concepto de capital e intereses- por un total de \$ 529.199,72 con fecha de corte al 30 de septiembre de 2019.

El art. 22 de la ley 27.423 establece que en los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía del asunto, si hubiera sentencia, será el de la liquidación que resulte de la misma, actualizado por intereses si correspondiere. En el caso bajo análisis, no se configura el supuesto de actualización por intereses previsto en la norma que peticiona. Amén de que sí se consideran los intereses que se computaron al determinar las acreencias a la fecha de cierre del cómputo del crédito de fondo. La liquidación aprobada que sirve de base regulatoria es la expresión numérica del crédito reconocido en autos, con más los intereses devengados hasta la fecha de cierre del cálculo (30/9/2019), en el caso \$ 529.199,72.

Ello no implica que los honorarios deban quedar desactualizados frente al tiempo que transcurre desde el cierre de liquidación hasta la fecha de dictado de la providencia regulatoria de los emolumentos, en tanto a partir de la sanción de la ley 27.423, los emolumentos se regulan en Unidad de Medida Arancelaria (UMA) equivalente al 3 % de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia (conf. art.19).

Precisamente, la finalidad de la norma es mantener los honorarios actualizados en forma automática cada vez que el Superior Tribunal defina su valor dictando la acordada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

correspondiente; una vez establecida la cantidad de UMA, el honorario se actualiza periódicamente lo que permite que no pierda poder adquisitivo. Tal finalidad habrá de ser cumplida cabalmente si se determina la proporción en UMAS respecto del capital de condena (capital más intereses) a la fecha de cierre y no a la de regulación.

En tal sentido, se advierte que el método que aplica la Sra. Juez de grado, resulta contrario a los propios fines de la norma arancelaria, en tanto al utilizar una base regulatoria que se mantuvo fija -desde la fecha de cierre 30 de septiembre de 2019 hasta la fecha en que procedió a la regulación (26 de agosto de 2022)- ello la evidencia desactualizada por el mero transcurso del tiempo.

En efecto, al partir de una base de cálculo que no es contemporánea a la regulación, el resultado de la retribución profesional se encuentra desvalorizado, máxime si se tiene en cuenta el proceso inflacionario que está atravesando nuestra economía, el valor tomado como base regulatoria pierde representatividad y significación económica.

Ese perjuicio producido sobre estipendios de neta naturaleza alimentaria debe corregirse y entendemos que la solución para mantener actualizada la base de cálculo, es considerar el lapso de tiempo que media entre el cierre de la liquidación y la fecha en que se resuelve su aprobación, y adoptar la unidad de medida que fija la ley de aranceles para profesionales de abogados, procuradores y los auxiliares de la justicia, vigente a la fecha de corte de liquidación, esto permitirá mantener con el mismo valor adquisitivo los emolumentos que se regulan recién al momento de aprobación de la liquidación.

En este orden, a los fines de conservar actualizados los honorarios del Dr. Percovich, la UMA que debe tomarse es la vigente al momento de corte de liquidación -es decir al 30/9/2019- fecha en la cual la unidad monetaria arancelaria equivalía a \$ 2.638 conforme Acordada C.S.J.N. 28/2019.

En consecuencia, encontrándose apelados los emolumentos por altos y bajos, de conformidad a las pautas precedentemente señaladas y en atención al mérito e importancia de las tareas realizadas en la primer etapa ejecutiva, corresponde elevar los honorarios pertenecientes a la representación letrada de la parte actora a la cantidad de 16,25 UMA equivalentes al día de la fecha a la suma de \$ 314.242,50 de acuerdo a lo establecido en los arts. 16, 21, 24 y 41 de la ley 27.423 (conf. C.S.J.N. “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/Acción declarativa” sentencia del 4 de septiembre de 2018 y “Propato Oscar Alberto c/ANSeS s/Reajustes Varios”, Expediente 48811/2009, sentencia del 1 de octubre de 2020), con más el IVA en caso de corresponder.

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1º) Confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2022: 2º) Revocar parcialmente la sentencia interlocutoria simple del día 26 de agosto de 2022 y elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora a la cantidad de 16,25 UMA equivalente al día de la fecha a la suma de \$ 314.242,50 (Conf. ley 27.423 y Acordada CSJN), con más el IVA en caso de corresponder;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

3°) Costas de Alzada a la demandada vencida (art.68 CPCCN); 4°) Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su actuación en la Alzada en el 30 % de la suma fijada por su labor en primera instancia -conf. art. 30 de la ley 27.423-, con más el IVA en caso de corresponder (cfr. Compañía General de Combustible SA s/Recurso de Apelación” sent. del 16/06/93) y 5°) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

KPB



#25749319#364688198#20230808184528227